

Marchas y contramarchas en el desarrollo de la ciencia política argentina

*María Melina Guardamagna**

Conicet, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina

RESUMEN

Existen diversas formas de abordar el estudio del origen y desarrollo de la ciencia política y diversos enfoques desde los cuales reconstruir dicho proceso, de forma que nos permitan ir más allá de una simple cronología histórica. En el caso de Argentina, dicho proceso comienza relacionándose, a principios del siglo XX, con la articulación de una disciplina orientada a formar dirigentes políticos y administrativos para la función pública. Posteriormente, junto al desarrollo y creciente autonomización disciplinar, la ciencia política empezó a diferenciarse de las relaciones internacionales y otras ciencias sociales. El retorno a la democracia en 1983 fue el escenario propicio para que, junto a la revalorización de las ciencias sociales en general, se organizaran nuevas carreras y especialidades en la práctica de la ciencia política, principalmente a nivel de posgrado. Al mismo tiempo, se produjo en este período la configuración de una nueva cultura política democratizante. Esta replantea las relaciones entre el intelectual y la política.

Palabras clave

Ciencia, política, desarrollo, Estado, Argentina

Progress and drawbacks in the development of Argentinean political science

ABSTRACT

There are several ways to approach the study of the origin and development of Political Science, and several points of view from which to reconstruct this pro-

* Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Argentina; doctora (c) en Ciencia Política Universidad Nacional San Martín (UNSam), Argentina. Becaria Conicet. Docente-investigadora del Centro de Estudios de Innovación Institucional sobre la Gobernabilidad Democrática Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo. Se agradece la información y comentarios aportados por el Dr. Arturo Fernández para la elaboración del presente artículo. E-mail: meliguardamagna@gmail.com.

cess that allow us to go beyond a simple historical chronology. In the case of Argentina, the process started in relation, at the beginning of 20th century, to the formulation of a discipline aimed at training political and administrative leaders for public service. Later, along with the development and increasing autonomy of disciplines, political science started differing from international relations and other social sciences. The return to democracy in 1983 was the right setting in which, along with the reevaluation of social sciences in general, new careers and specialties could be organized in the practice of political science, particularly at the post-graduate level. At the same time, the configuration of a new political democratizing culture began in this period. This redefined the relations between intellectuals and politics.

Keywords

Science, politics, development, State, Argentina

El proceso de institucionalización de la ciencia política, su inserción y reconocimiento como disciplina autónoma por parte de la comunidad internacional se encuentra íntimamente ligado al desarrollo del pensamiento político, las ideologías y la filosofía política, así como también al surgimiento del moderno Estado capitalista. Existen, por lo tanto, diversas formas de abordar el estudio del desarrollo disciplinar y diversos enfoques desde los cuales reconstruir dicho proceso, de forma que nos permitan ir más allá de una simple cronología histórica.

Desde una de estas perspectivas, el desarrollo disciplinar se encuentra vinculado al proceso de generación de pensamiento político que en cada país ha tenido características particulares. En el caso de la Argentina se distinguen tres períodos de gran influencia del pensamiento político, asociados a diferentes ideologías. El primero, entre 1830 y 1900, durante el cual las ideologías liberales lideraron el proceso político y alentaron la formación de una elite que exitosamente supo construir un Estado moderno a fines del siglo XIX.

El segundo, entre 1900 y 1945, fue el momento en el cual abogados y filósofos desarrollaron las bases del conocimiento político a partir del pensamiento democrático y pluralista que había surgido con la construcción del Estado liberal años antes, conceptos que después de la crisis económica y política de 1930 fueron perdiendo conexión con la realidad. Al mismo tiempo, la sociedad fue impregnada por varias corrientes políticas e ideológicas que pusieron en discusión las cuestiones nacionales y sociales más relevantes, las que habían sido dejadas de lado tras el triunfo del conservadurismo dentro de la elite dominante. Los herederos de la Generación del

80, elite política e intelectual que gobernó el país entre los años 1880 y 1916, aglutinados en el Partido Conservador, fueron extraños a los intereses de la mayoría y a las crecientes demandas provenientes de los sectores más sensibles de la sociedad.

Finalmente, entre 1945 y 1983, la presencia del movimiento peronista en la escena política argentina y la formación de una tradición intelectual nacional y popular produjo un divorcio o al menos un paulatino aislamiento entre la concepción ideológica que conducía las principales cuestiones de la vida política y la producción académica universitaria, ya que los escritores de ensayos con ideas nacionalistas o socialistas que tenían la posibilidad de dar a conocer sus objeciones a las elites sociales fueron muy pocos.

En el ámbito académico, el proceso de institucionalización de la ciencia política estuvo fuertemente precedido por el impulso de la sociología que comienza a desarrollarse después de 1958 en el país. Más allá de tratarse de un excelente período de creación intelectual, la compleja experiencia política, social, económica y cultural del peronismo no fue aceptada ni explicada hasta 1970 en el ámbito de las universidades. Esto provocó un persistente alejamiento entre el influyente liderazgo político del general Perón (incluyendo a los militares y a la Iglesia Católica) y el campo del pensamiento académico y científico. Lo cierto es que la realidad política de esta época, signada por la confrontación y la crisis en la que se mantuvo el peronismo y los sectores opositores, fue ignorada como una cuestión que requería una seria y urgente problematización por parte de las incipientes ciencias sociales para interpretar y ayudar a comprender científicamente un proceso que debilitaba a los actores políticos y sociales, y deslegitimaba a una actividad académica encerrada en los claustros.

Otra de las perspectivas desde la cual se puede estudiar el desarrollo disciplinar, que atraviesa los períodos de mayor influencia del pensamiento político e ideológico, es la que pone el acento en la interrelación entre el Estado y el conocimiento social, orientado a incrementar la autonomía y capacidad estatal para la formulación e implementación de políticas. Se trata, por lo tanto, de analizar el desarrollo de la ciencia política argentina desde una lógica que tiene que ver con factores externos que influyen en la producción y legitimación de conocimientos sociales, sentido en el cual el Estado ha tenido un rol central en el proceso de legitimación de la ciencia política en tanto disciplina académica.

Este tipo de estudios demuestra la importancia que adquiere la relación entre el Estado, las ideas y las instituciones educativas encargadas de su reproducción. Se trata de investigaciones histórico-comparadas que permiten comprender los diversos modos en los que las estructuras y actividades gubernamentales influyen en el desarrollo intelectual y la organización social de las ciencias sociales, así como también sus aplicaciones políticas.

En el caso de la ciencia política, su proceso de institucionalización en relación con el Estado y las demandas de conocimiento teórico y formación de profesionales capacitados para la acción estatal, se diferencia del de otras ciencias sociales. En este sentido, la ciencia política, en tanto disciplina académica, recién adquiere autonomía a mediados del siglo XX, en comparación con otras ciencias como la economía y el derecho. Es decir, se trata de una disciplina relativamente nueva que transita un proceso de autonomización que, como afirman Neiburg y Plotkin (2004), se asocia al desarrollo de demandas y necesidades del Estado rápidamente modernizado y burocratizado.

En el caso de las ciencias sociales y específicamente de la ciencia política en Argentina, la constitución de estos ámbitos de validación de ideas y prácticas ha sido problemática. Por un lado, debido a la existencia de un espacio burocrático caracterizado por “cambios institucionales bruscos y relativamente frecuentes [...] que redefinen organigramas, funciones y carreras”, y por el otro, un ámbito académico “cambiante y fragmentado, fuertemente ligado a la política y a los propios conflictos en el ámbito estatal, sujeto a los violentos cambios institucionales que atravesaron la historia nacional y que han debilitado insistentemente la posibilidad de generar mecanismos propios de validación del conocimiento” (Neiburg y Plotkin, 2004: p.20). Esto ha contribuido, en numerosas oportunidades, al alejamiento de los científicos políticos de la realidad política objeto de sus investigaciones, debido, en parte, a la “escasa aplicación de nuestra producción académico-científica en la formulación e implementación de las políticas públicas”, frente a lo cual “la ciencia política necesita hacer un esfuerzo colectivo para entender las necesidades sociales de nuestro tiempo” (Trent, 2009: p.12).

I. La etapa de la protociencia política

Más allá de la reciente consolidación de la ciencia política como disciplina y profesión, el pensamiento político ha presidido a la disciplina constituyendo de hecho la reflexión más antigua del género humano en torno a las desigualdades sociales que se generan en estructuras de poder.

El desarrollo del pensamiento político en la academia

En el caso argentino, la organización nacional a fines del siglo XIX posibilitó el desarrollo de universidades estatales que, en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y

Santa Fe, dieron un significativo ímpetu a la actividad científica. En este contexto se crearon en el ámbito académico diferentes cursos de ciencias sociales (también llamadas ciencias de la cultura o el espíritu). En las facultades de derecho y ciencias sociales se crearon cátedras de sociología, mientras se dio un mayor impulso a los cursos de derecho político y constitucional. La enseñanza de la filosofía, por otro lado, contempló a autores que abordaban problemas históricos y sociales.

Estos diversos tipos de acercamiento a las preocupaciones políticas de la época se orientaron hacia el refuerzo de las instituciones políticas y legales establecidas por la Constitución de 1853, mientras, la matriz disciplinar de estos estudios se basaba principalmente en el conocimiento de la historia, la filosofía social y el derecho público y político. El positivismo predominante constituyó el marco ideológico que favoreció la confianza en la razón y su capacidad para resolver problemas vinculados a la mejora de la humanidad. Esto condujo a la adopción de perspectivas históricas y deterministas, inspiradas en Spengler, y también de la filosofía idealista, bajo la influencia de autores neokantianos.

Los autores y los profesores que, en este contexto, se preocuparon por los problemas sociales y políticos ocupaban, por lo general, cargos en la función pública tanto en la política como en la judicatura, o se dedicaban al ejercicio de ocupaciones liberales, en particular a la profesión de abogado. Algunos de ellos formaron parte de un grupo de pensadores que impulsó el desarrollo de la sociología en el país, como fueron Ernesto Quesada, Juan Agustín García, Francisco y José Ramos Mejía, José Ingenieros y Juan Bialet Massé, cuya investigación “El Estado de la clase obrera en Argentina”, informe solicitado por la comisión organizada por el Presidente Julio Argentino Roca en 1904, presenta una notable exactitud metodológica.

Otros autores desarrollaron estudios de derecho administrativo y constitucional con niveles de excelencia y reconocimiento internacional, como pasó en varias especialidades legales. En ese entonces encontramos a personalidades conocidas como Rodolfo Rivarola, quien fuera el fundador de la primera *Revista Argentina de Ciencia Política* en 1910, publicada hasta 1928. Después de 1930, Segundo Linares Quintana, Rafael Bielsa, Silvio Frondizi y, más recientemente, Alberto Spota y Carlos Fayt analizaron una teoría del Estado desde la perspectiva legal y estudiaron a fondo las publicaciones de derecho público. Los constitucionalistas más prestigiosos, conducidos por el doctor Linares Quintana, fundaron en 1957 la Asociación Argentina de Ciencia Política, que cuatro años más tarde comenzó a formar parte de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Fue este mismo grupo el encargado de crear la nueva *Revista Argentina de Ciencia Política* en 1959 y organizar algunos Congresos Nacionales entre 1958 y 1966.

En el ámbito de la reflexión filosófica, hubo significativas contribuciones al desarrollo del pensamiento político; entre ellas se encuentran las investigaciones realizadas por Eugenio Pucciarelli y Ambrosio Gioja. Desde la historia, a mediados del siglo XX, José Luis Romero desarrolló una historia del pensamiento político argentino basada en el análisis social de las ideologías políticas. Se trata de un trabajo que, más allá de las polémicas que ha generado, constituye un antecedente esencial de los estudios sociopolíticos que años más tarde se generalizarían.

Sin embargo, hasta 1943, el campo académico no fue una caja de resonancia de las discusiones que, desde finales del siglo XIX, marcaron el devenir de la realidad política argentina. Antes y después de la Reforma Universitaria de 1918, los estudios políticos dentro de la universidad se desarrollaron bajo la ideología dominante: el carácter incuestionable de la república liberal basada en la Constitución de 1853. Los fundamentos teóricos, cercanos al liberalismo positivista, se alejaron cada vez más de los conflictos sociales y políticos inherentes a un país periférico como Argentina, sobre todo después de los cambios del mundo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1930.

Las ideologías socialistas y nacionalistas fueron el lugar desde el cual se entendieron aquellos conflictos políticos. Sus líderes intelectuales, que no formaban parte de aquellas instituciones académicas monopolizadas por el pensamiento conservador, supieron analizar los grandes problemas del país. Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz constituyen los ejemplos más significativos de un grupo de autores ideológicamente comprometidos que hicieron una verdadera contribución en el proceso de cambios sociales y políticos que se estaban generando. Por lo general, en aquella época los escritores de ensayo fueron los que supieron abordar la realidad nacional con más eficacia, por sobre la producción académica característica de aquellos años.

El período de la protociencia política fue, en definitiva, el momento en el cual prevaleció una mirada jurídica sobre las instituciones políticas, junto con una fuerte influencia del derecho político. En el desarrollo de esta “ciencia política formalista” (Bulcourf y D’ Alessandro, 2003: p.137), que presta una atención casi exclusiva a los marcos formales en los que la acción política se desenvuelve, se utilizaron diferentes métodos: “unos enfatizaban lo general, la derivación de paradigmas clásicos del pensamiento político y la exégesis de los textos; otros buscaban la raíz histórica, pasando a confundirse con el campo de la historia de las instituciones” (Cavarozzi y Martínez Nogueira, mimeo: p.14, en Bulcourf y D’ Alessandro, 2003: p.137). Fue una época en la que se estudiaron en profundidad temas del derecho público y las teorías del Estado, mientras la sociología comenzaba a emerger bajo el enfoque estructural-funcionalista y de la teoría de la modernización, afianzando la importancia en el país de los estudios en ciencias sociales.

El Estado legitimador de conocimiento social

El desarrollo y la institucionalización de la ciencia política, incluida la etapa de la protociencia política, también pueden ser comprendidos desde los procesos de legitimación de diversos proyectos de Estado, a través, entre otros factores, de la producción de conocimiento teórico y la formación de cuadros políticos y administrativos necesarios para la formulación e implementación de políticas públicas.

La formación de cuadros políticos constituía una preocupación propia de los Estados modernos. En Argentina, dicha inquietud comienza a materializarse a principios de la década de 1920 en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), primer antecedente del estudio universitario de la política en el país y en toda América Latina. La formación de cuadros especializados en el ejercicio de las funciones del Estado surge en torno a las críticas a la democracia de masas y a la búsqueda de las elites rosarinas que necesitaban nuevos espacios políticos de actuación, tras haberse desarticulado la república oligárquica (Gluck y Mutti, 2009).

En el transcurso de estos años se proyecta la creación de un Instituto de Ciencias Políticas para la formación de funcionarios para el Estado. Dicha formación es pensada como una solución a los problemas de eficacia, destinada no sólo a la capacitación de funcionarios políticos, sino también de cuadros para la administración pública. Lamentablemente, dicho proyecto no pudo concretarse aunque, como sostienen Gluck y Mutti (2009), fue seguramente un antecedente para las modificaciones que años después se implementarían dentro de la universidad.

En 1927 se crean en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) la Licenciatura para el Servicio Consular, la carrera de idóneo para la Administración Pública y los doctorados en Diplomacia y en Ciencias Políticas, primer antecedente del estudio universitario de la política en el país y en el continente. Dos años más tarde, las licenciaturas se transforman en la Licenciatura en Ciencias Políticas, y en Diplomacia y Relaciones Internacionales, ambas de la UNL. En 1968 se funda la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se agrupan las carreras que pertenecían a la UNL. En este contexto, la Licenciatura de Ciencias Políticas y Diplomacia pasa a la órbita de la Facultad de Derecho y Ciencia Política como Escuela Superior de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, para finalmente convertirse en facultad en 1973.

Tanto el proyecto de creación de un instituto de ciencias políticas como la creación de la licenciatura, la carrera para administradores públicos y los doctorados en diplomacia y ciencias políticas en la década de 1920, se piensan tras una misma preocupación que tenía que ver primordialmente con formar una clase de

políticos y administradores capacitada e idónea para la función estatal con el objeto de jerarquizar la actividad política a través de la educación (Gluck y Mutti, 2009). Sin embargo, faltaban aún algunos años para que desde el Estado, en tanto actor generador y legitimador de conocimiento social, se alentara con mayor fuerza el reconocimiento de la ciencia política como disciplina y profesión.

II. El ingreso de la ciencia política al ámbito académico

La necesidad de formar una clase política destinada a cumplir los objetivos de la política nacional vuelve a materializarse en 1950 con la creación de los Cursos de Formación Política en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), bajo las influencias del servicio civil inglés y francés, y los contenidos que allí se impartían. Desde principios del siglo XX, e inclusive con anterioridad, como es el caso de Inglaterra, gran parte de las políticas orientadas a la formación de administradores y altos funcionarios públicos habían comenzado a implementarse a través del servicio civil de carrera. No es de extrañar, entonces, que este constituya uno de los antecedentes más significativos en la política formulada por el gobierno de Perón en 1949.

La crisis de 1930 había marcado el agotamiento de un modelo y su readecuación en el Estado de Bienestar. El proyecto nacionalista encarnado por Perón, a mediados del siglo XX, y el nuevo rol intervencionista del Estado requerían de una clase dirigente capaz de cumplir los objetivos de la política nacional que establecía la Constitución de 1949. La elite política que hasta entonces había gobernado el país, representante de los sectores conservadores y liberales de la sociedad, se encontraba deslegitimada para esta función. De esta forma, se encarga a la universidad pública la formación política de las “personas que se ocuparán, habitual y activamente de la dirección del Estado, a quienes seguirán pasivamente los integrantes del grueso sector de la multitud ciudadana” (Sampay, 1951).

En 1950 comienzan a dictarse, en el ámbito de la UNCuyo, cursos generales y obligatorios de formación política para el conocimiento de la realidad argentina junto a la edición de un Boletín de Estudios Políticos, los que anticiparon la creación de una carrera de estudios universitarios y de una unidad académica específica para el desarrollo de la disciplina regional. Finalmente, en 1967, la Escuela Superior de Estudios Políticos y Sociales alcanza el rango de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La preocupación en torno a los estudios políticos dentro de la vida universitaria no estuvo relacionada inicialmente con la inquietud de formar politólogos, sino

en darle formación política a la futura clase dirigente. Por este motivo, los cursos fueron obligatorios y comunes para los estudiantes de todas las facultades de la UNCuyo, como un requisito indispensable para la obtención de cualquier título universitario. Se visualiza la misma preocupación tanto en Rosario como en Cuyo, por proporcionar mayores niveles de autonomía al Estado a través de la formación de funcionarios capaces de formular e implementar políticas públicas. Desde esta preocupación se legitima la disciplina, ingresando al ámbito académico.

En el caso de la UNCuyo, el surgimiento de la disciplina fue posible a través del artículo 37 de la Constitución Nacional. Más allá de haber sido inicialmente pensado como una instancia de capacitación política transversal a la formación de todas las profesiones, el Estado terminó impulsando la creación, dentro de la universidad, de una unidad de formación específica para el estudio de la política y lo social, como fue la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De esta forma, la lógica de la organización universitaria que supone la disposición de los saberes en unidades académicas específicas, terminó reinterpretando la política del gobierno de Perú.

En el transcurso de estos años, varias universidades fueron fundadas en el país y muchas de ellas crearon departamentos de Ciencia Política al interior de las facultades de Ciencias Sociales. Docenas de diplomáticos fueron formados en Rosario y muchos administradores y políticos siguieron la carrera de Ciencia Política en estas universidades nacionales y provinciales. De ellas surgieron renombrados investigadores como son José Luis de Imaz, Juan Carlos Puig, Iris Laredo, Emilio Tenti, Ernesto Aldo Isuani y Eduardo Bustelo, quienes terminaron sus estudios de grado en Argentina y más tarde se especializaron en universidades extranjeras. Ellos ayudaron a crear un nuevo campo de conocimiento, el de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.

Lamentablemente, este proceso académico e institucional se vio coartado por las sin razones que una universidad militarizada impuso a las ciencias sociales con el golpe de Estado de 1976. Ninguna más que la ciencia política se vería afectada, dada la circularidad entre la política como objeto de indagación y la propia actividad política. Los hechos marcaron un vaciamiento intelectual y académico en general. Las universidades se convirtieron en lo que Klimovsky llamó “las universidades de las catacumbas” (Bulcoursf y D’ Alessandro, 2003: p.158).

En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, la carrera se modificó en respuesta a las demandas de un gobierno militar que necesitaba cuadros administrativos capacitados para la función pública. Primó en este período una perspectiva estrechamente tecnocrática (Sarolo, 2007) en la concepción de la ciencia. De esta forma, la disciplina quedó desdibujada en un

nuevo plan de estudios que correspondía principalmente a una formación en administración pública.

Algo similar ocurrió con la Universidad Católica Argentina (UCA) y su relación con la corporación militar en el gobierno. En medio de profundos enfrentamientos y presiones de la Iglesia, se reglamentó en 1958, durante la Presidencia de Frondizi, la reforma del sistema universitario, lo que permitió la creación de universidades privadas. Ese mismo año, la UCA fue oficialmente fundada. Muchas universidades privadas comenzaron a ofrecer el título en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En este contexto, en 1965 comienza a funcionar en el ámbito de la UCA la Escuela de Ciencias Políticas. Los cursos, tanto de licenciatura como de doctorado, se orientaban a la formación de vocaciones políticas, de futuros diplomáticos y de funcionarios públicos. El período militar que se inicia a mediados de la década de 1970 afectó seriamente estas aspiraciones en lo relativo a la actividad política misma, pero no así en lo tocante a la diplomacia y la administración pública, campos donde la inserción de los graduados resultó altamente satisfactoria. La Escuela de Ciencias Políticas logró definir su perfil sin demasiadas contradicciones con el proceso político y social de aquellos años para formar líderes políticos que nutrieran a la nueva clase dirigente. Este es otro indicio más que demuestra cómo el desarrollo de la disciplina en Argentina puede entenderse a partir de la interrelación entre el Estado, las instituciones educativas y las profesiones a través de las cuales se generan procesos de legitimación de conocimiento teórico necesarios para la reproducción del conjunto de ideas que sustentan al régimen político en cada momento.

Dentro de las universidades privadas que incorporaron a su currícula la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la carrera de la Universidad del Salvador, a cargo del doctor Carlos Strasser y la dirección de Carlos Floria, se destacó por ofrecer hacia 1970 un moderno programa, que no sólo reunía en su plantel docente a los científicos políticos más importantes de la época, como Natalio Botana, Guillermo O'Donnell, Óscar Oszlak, Marcelo Cavarozzi, entre otros, sino que además alentó el pasaje de la ciencia política juricista y del estudio histórico del pensamiento político a la ciencia política en singular. Esto fue posible, en parte, por la incorporación al plan de estudio del conductismo, enfoque bajo el cual la mayoría de estos politólogos realizaron sus estudios de posgrado en universidades estadounidenses, que luego introdujeron al país con su retorno a finales de la década de 1960, principios de los 70. Se constata en este sentido un esfuerzo por “traducir modelos internacionales y experiencias tomadas de otros contextos a las posibilidades locales” (Lesgart, 2007: p.125).

Otro caso para destacar en el desarrollo disciplinar es el de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que, luego del golpe de Estado en Chile en 1973, se instaló en la Argentina, bajo la dirección de Carlos Strasser. En medio de un contexto de polarización ideológica e intolerancia, además de Flacso, la labor desarrollada por otros centros privados como Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico), Instituto Di Tella, Cisco (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) y CISEA (Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración) nos permite subrayar la notable tarea de investigación que en ellos se desarrolló y que permitió la renovación de la ciencia política académica, dándole una proyección desconocida hasta entonces. Estos centros privados de investigación albergaron a un grupo de científicos políticos que no emigraron durante el último período de dictadura militar argentina, que comienza en 1976. Entre ellos, los más destacados fueron: Carlos Strasser de Flacso; Francisco Dellich y Mario Dos Santos de Clacso; Guillermo O'Donnell, Marcelo Cavarozzi y Óscar Oszlak de CEDES; Natalio Botana del Instituto Di Tella; Darío Cantón de CICSO; y Dante Caputo de CISEA.

Tal como sostienen Bulcourf y D' Alessandro, el auge de la ciencia política empírica a fines de los 60 y principios de los 70, se debió también “al contexto internacional fomentado desde Estados Unidos, y su contrapartida desarrollista en América Latina, donde el ideario de la ciencia y su correlato tecnológico y político se articulaban con los principios de secularización, urbanización e industrialización” (2003: p.150).

La influencia de la sociología y otras disciplinas en el desarrollo disciplinar

La creación bajo el impulso de Gino Germani de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre los años 1955 y 1966, generó un nuevo acercamiento del ámbito académico a la comprensión de la realidad política argentina. Excepcionales personalidades de la sociología se volcaron hacia los estudios políticos; entre ellos podemos mencionar los nombres de Juan Carlos Portantiero, Miguel Murmis, José Nun, Torcuato Di Tella, Juan Carlos Torre y Roberto Carri. Años más tarde, también Horacio González, Alcira Argumedo y Ricardo Sidicaro. La lista no es exhaustiva, ya que esta tendencia ha permanecido hasta ahora.

Por otro lado, juristas como Carlos Fayt y Juan Carlos Rubinstein tuvieron un paulatino acercamiento a los estudios de sociología política, alejándose del enfoque

del derecho constitucional. Esto permitió la incorporación de nuevos métodos de enseñanza de la Teoría del Estado en las Facultades de Derecho.

Entre los años 1955 y 1973, el tema central de reflexión política de científicos políticos, sociólogos y abogados fue el fenómeno del peronismo, sus orígenes, su naturaleza, composición social y su posible evolución. Más allá de que la mayoría de estos científicos no pertenecieron al peronismo, su análisis significó una evolución hacia la comprensión de los populismos nacionales y de la experiencia argentina en particular.

III. El retorno a la democracia y la consolidación de la ciencia política

El proceso de consolidación de la ciencia política como disciplina y como profesión fue desarrollándose de forma paralela al proceso de transición a la democracia que comenzó en 1983. La transición y consolidación de la democracia política posibilitó el desarrollo de las ciencias sociales en el país y, sobre todo, de la ciencia política, que el período de dictadura militar, debido a sus estrictos controles y censuras impuestas a la libertad de pensamiento, había desalentado e inclusive impedido. Es por ello que el retorno a la democracia en 1983 constituye uno de los períodos donde se ve con mayor claridad el rol del Estado en tanto generador y legitimador de conocimiento social, principalmente hasta el año 1987, cuando la crisis económica comenzó a afectar el financiamiento de aquel proceso educativo y científico.

Con el triunfo de Alfonsín se abrió un nuevo ciclo en la historia de las ciencias sociales argentinas, especialmente en el caso de la ciencia política. Con anterioridad a la caída del régimen militar, Alfonsín ya había mostrado su interés por acercar a los intelectuales a la política, hecho que funcionaría como una caja de resonancia en el desarrollo e institucionalización de la disciplina. Se produce en este período la configuración de una nueva cultura política democratizante, que va a replantear las relaciones entre el intelectual y la política. Algunos de ellos, extrapartidarios que pertenecían a centros de investigación privados como el CISEA o el CEDES, ocuparon puestos de primera importancia en los gabinetes de Alfonsín. Dante Caputo fue puesto al frente de la cartera de Relaciones Exteriores, y Jorge Sábato, de la de Educación, ya avanzado el gobierno radical. Jorge Roulet fue nombrado secretario de la Función Pública, y Enrique Groisman, subsecretario de la Función Pública; mientras, Óscar Ozlak ocupaba la otra subsecretaría.

La discusión teórico-política en aquel momento giraba en torno a la transición democrática y la consolidación del régimen político, “evaluado desde las instituciones de la poliarquía teorizadas por Robert Dahl” (Lesgart, 2007: p.136). Por otro

lado, la necesidad de reestructuración del Estado democrático ponía nuevamente en la agenda política la demanda de cuadros políticos formados para la generación de políticas públicas y técnicos capaces de gerenciarlas. Tanto en la gestión pública como en muchos cargos de gobierno, aparece la profesión del cientista político; lo mismo sucede en diferentes asesorías en espacios públicos como privados (Bulcourf, 2005). Paulatinamente, la profesión fue adquiriendo, con el impulso del Estado, reconocimiento social, más allá de lo cual los partidos políticos no eran aún tan permeables a los nuevos conocimientos teóricos que se estaban generando.

Junto al significativo impulso desde el Estado, hubo otros hechos que acrecentaron la consolidación de la disciplina. Entre ellos, la creación de la carrera en ciencias políticas en la UBA, en 1985, cuyo plan de estudio se fundamentaba en la necesidad de la política democrática y sus instituciones, y de su conocimiento teórico e intelectual. Por otro lado, la contribución realizada por analistas políticos argentinos que permanecieron en el país y de otros que emigraron a México, interesados en adaptar la teoría de la democracia durante la transición posdictadura militar.

Estas experiencias en el exterior alentaron el surgimiento de una “nueva generación de intelectuales, que, fuera de las fronteras de Argentina, leen a otros autores, se proveen de temáticas novedosas y generan contactos con quienes hacen de la ciencia política una profesión” (Lesgart, 2007: p.133), posibilitando un creciente proceso de especialización de la disciplina y el acercamiento entre la producción nacional académica y tendencias de la ciencia política internacional.

Dentro de este grupo de cientistas políticos, el papel desempeñado a nivel internacional por Guillermo O’Donnell posibilitó que la ciencia política argentina entrara al mundo académico. Esto fue posible en primer lugar por sus significativos aportes teóricos en torno al ‘Estado burocrático autoritario’, concepto a través del cual describe las dictaduras militares durante los años 70 en América Latina y otras regiones. En este sentido, O’Donnell fue uno de los principales promotores de los estudios comparados en el país y en la región. Posteriormente, su cargo como presidente de la Asociación de Ciencia Política Internacional (IPSA, por su sigla en inglés) durante la década de los 80 permitió que Buenos Aires fuera la sede del V Congreso Mundial, donde se dieron cita los politólogos más reconocidos a nivel mundial. Más tarde, sus trabajos se hicieron y continúan siendo textos de formación obligatorios en prácticamente todos los cursos de ciencia política en Argentina.

El Estado también ha alentado los procesos de generación de conocimiento teórico a través de organismos como el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que financia proyectos de investigación, en su mayoría en vinculación con universidades nacionales y que permite, a través de estancias de investigación en el exterior, la inserción de los investigadores

argentinos en los debates de la disciplina a nivel mundial. Creado en la década de 1950 bajo el gobierno de Perón, lamentablemente durante el gobierno militar fue prácticamente arrasado y reestructurado por medio de un sistema de ‘institutos’ creados ad hoc, en los que se subsidiaba a los científicos leales al régimen militar (Guiñazú y Gutiérrez, 1991-1992). A partir de 1983, con el retorno a la democracia y la necesidad de restablecer y fortalecer los estudios de ciencias sociales, este organismo vuelve a ser fuente de financiamiento para la formación de investigadores, aunque esto también se vio afectado por la crisis económica que viviera el país a partir de 1987.

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, en 2003, se fortalecen las políticas orientadas a la producción de conocimiento social, sobre todo a través del fuerte impulso que se dio al financiamiento para el incentivo a la investigación, produciéndose, entre otras medidas, un incremento en el número de becas para la formación doctoral y posdoctoral de jóvenes investigadores en el país. En el marco de esta política, a partir de 2007, el Conicet, como ente autárquico, se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación de la nación, desde donde se promueven y ejecutan las actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional.

En la actualidad, 140 investigadores académicos trabajan en facultades de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Administración Pública, en departamentos e institutos de universidades públicas y privadas. La mitad de ellos integra alguna subárea científica formalmente aprobada por el Conicet. Esto ha permitido un considerable aumento en la cantidad de investigaciones que se realizan en el país, así como también una mejora del sistema de incentivos económicos para la carrera docente; mientras, los más de 40 programas de maestría y doctorado han aumentado el número y calidad de investigadores y analistas políticos.

Dar una opinión acerca de la calidad de este considerable número de nuevas contribuciones y producción de conocimiento sería precipitado. Aumenta la tendencia a trabajar en equipo y realizar publicaciones para lograr las exigencias de los diferentes sistemas de evaluación. La paga que los investigadores reciben por su trabajo, sobre todo los más jóvenes, está por debajo de sus expectativas, a tal punto que la posibilidad de reemplazo de la generación que tiene que retirarse en los próximos años no es tan clara. En este contexto existen contradicciones. Jóvenes doctores emigran a universidades del exterior mientras el mismo problema económico es afrontado por el personal que da clases en las universidades públicas y privadas del país. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la cantidad de becarios internos, externos y doctorados, quienes constituyen una masa crítica formada con recursos principalmente públicos.

IV. La Sociedad Argentina de Análisis Político

Un párrafo aparte merece la labor desarrollada por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Creada en 1982, en el momento en que la disciplina “se ligó al retorno y funcionamiento constitucional de las instituciones, y cuando la política fue mirada desde el prisma de la democracia representativa y poliárquica” (Lesgart, 2007: p.123), coexistió durante tres años, hasta 1995, con la vieja Asociación Argentina de Ciencia Política bajo el reconocimiento de la IPSA.

La SAAP organizó en 1991 el V Congreso Mundial de Ciencia Política en Buenos Aires y desde su creación ha organizado, cada dos años, diez congresos nacionales, incluido el del corriente año, siendo esta una de sus principales actividades. Cuenta con más de 485 miembros de pleno derecho (graduados) y 400 adherentes (estudiantes).

Como institución científica y académica, la SAAP contribuye a la difusión y desarrollo de la ciencia política y disciplinas relacionadas con el objeto de mejorar sus métodos, técnicas y resultados. En este sentido, establece relaciones de cooperación con universidades, escuelas y departamentos, tanto públicos como privados, así como con centros de investigación y asociaciones relacionadas con el campo del análisis político, la teoría política, las políticas públicas y las áreas de estudios científicos relacionadas con la ciencia política, la administración pública y las relaciones internacionales de Argentina y el extranjero.

La SAAP además representa a la comunidad científica relacionada con la disciplina ante la IPSA y la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip), creada en 2002.

A fin de dar cumplimiento a estos objetivos, los miembros de la Asociación conforman un comité directivo que se renueva por períodos. Hasta ahora los presidentes de la SAAP han sido los siguientes: Óscar Oszlak (1983-1992), Edgardo Catterberg (1992-1993), Arturo Fernández (1993-1995 y 2000-2008), Eugenio Kvaternik (1995-2000). Miguel De Luca preside actualmente la Asociación desde julio de 2008, mientras Guillermo O'Donnell fue elegido Presidente Honorario en 2007.

V. Los desafíos de la disciplina: un camino a recorrer

Desde la perspectiva académica, existen aún importantes áreas de vacancia en el desarrollo de investigaciones en el campo de la ciencia política en el país. La investigación en política comparada no se encuentra todavía bastante desarrollada;

no hay investigaciones relevantes sobre psicología política, mientras deberían promoverse los estudios interdisciplinarios que podrían dar cuenta de la complejidad de los fenómenos políticos; contribuir al desarrollo de la teoría política y alentar el estudio de las problemáticas subnacionales. Institucionalmente, la ausencia de un ámbito académico para los científicos políticos, donde se promueva una crítica permanente y recíproca de su producción, revela la necesidad de generar nuevos espacios de encuentro para la discusión política y la formación de especialistas. En este sentido, se requieren centros de investigación con mayores niveles de institucionalización donde se garantice la producción independiente de conocimiento y los jóvenes investigadores encuentren un espacio para su desarrollo profesional.

En cuanto a la perspectiva relacionada con el Estado como productor y legitimador de conocimiento social, en Argentina existen fallas en el reclutamiento y capacitación de funcionarios y técnicos capaces de dar continuidad a las políticas estatales. Por otro lado, los actores y los estudios políticos se han limitado a advertir las consecuencias de una sociedad con crecientes niveles de inequidad y desigualdad, que ponen en peligro los logros de la coexistencia democrática desde la década de los 80 y los alejan muchas veces de las necesidades del Estado.

Es por ello que las investigaciones realizadas en el ámbito de la ciencia política deberían constituir un provechoso insumo para los políticos, funcionarios y líderes sociales, sentido en el cual debe continuarse alentando el desarrollo disciplinar. Este proceso no puede alejarse de la realidad política y social que, como cientistas sociales, nos reclama soluciones cada vez más complejas en la construcción de una sociedad con más libertad y justicia social.

Recibido abril 18, 2011
Aceptado agosto 16, 2011

Referencias bibliográficas

- Agulla, J. C., comp. (1996). *Ideologías políticas y ciencias sociales*. Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias/E. Sigma.
- Bulcourn, P. (2005). La ciencia política en busca de sentido. Disponible en Espacios Políticos, www.espaciospoliticos.com.ar [agosto, 2011].
- Bulcourn, P., y D'Alessandro, M. (2002). La Ciencia Política en la Argentina. *Quilmes. Revista de Ciencias Sociales*, N° 13., noviembre, 74-105.
- _____. (2003). La Ciencia Política en la Argentina. En J. Pinto, *Introducción a la Ciencia Política*, cap. 2: 133-184. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires, 4ta. ed.

- Elizalde, J. (2009). *Intelectuales y política en la transición democrática. El Grupo Esmeralda*. Tesis (Mg) en Ciencias Sociales, Flacso, Buenos Aires.
- Fernández, A., comp. (2002). *La Ciencia Política en Argentina. Dos siglos de historia*. Buenos Aires: Biebel.
- Gluck, M., y Mutti, G. (2009). Política de masas y eficacia gubernamental en la Argentina de los años 20': el surgimiento de los estudios de ciencias políticas en Rosario. Los proyectos de Rafael Bielsa y Juan Álvarez. *Revista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales*, Año 2, N° 2, 147-168.
- Guardamagna, M. M. (2010). Estado y ciencia política: la formación de cuadros políticos y su relación con las políticas públicas. Ponencia presentada en IX Congreso Nacional y II Congreso Internacional sobre Democracia. Rosario, Argentina.
- Guñazú, M. C., y Gutiérrez, M. A. (1991-1992). La Ciencia Política en Argentina: de la inestabilidad a la transición. *Doxa* N° 6, 143-159.
- Leiras, M.; Abal Medina, J.; y D'Alessandro, M. (2005). La Ciencia Política en la Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias en Santiago de Chile. *Revista de Ciencia Política*, Vol. 25, N° 1, 76-91.
- Lesgart, C. (2004). *Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del 80*. Rosario: Homo Sapiens.
- (2007). Pasado y presente de la Ciencia Política producida en Argentina. Apuntes para un debate de su porvenir. *Temas y Debates*, N° 14. Dossier, diciembre, 119-160.
- Neiburg, F., y Plotkin, M., comps. (2004). *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina*. Buenos Aires: Paidós.
- Sampay, A. E. (1951). La Formación Política que la Constitución Argentina encarga a las Universidades. Boletín de Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Nacional de Cuyo, N° 2, 9-53.
- Sarlo, B., 2007. *La batalla de las ideas (1943-1973)*. Biblioteca del Pensamiento Argentino VII. Buenos Aires: Emecé.
- Trent, J. E. (2009). Political Science 2010: Out of Step with the World? Empirical evidence and commentary. Paper preparado para el 21 International Political Science World Congress. Santiago, Chile, julio.